

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DEMANDADO	RAFAEL ANTONIO CORDERO DÍAZ
ACTUACIÓN	CONFLICTO DE COMPETENCIA
PROCEDENCIA	JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BELLO
RADICADO	05001 22 03 000 2022 00570 00
	INTERNO 2022-059
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 154
DECISIÓN	DIRIME CONFLICTO DETERMINANDO LA COMPETENCIA EN EL JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN

Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Se dirime por el presente proveído, el conflicto negativo de competencia suscitado entre el **JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN** y el **JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BELLO**, respecto de la demanda ejecutiva para efectividad de la garantía real promovida por el Departamento de Antioquia, en contra del señor Rafael Antonio Cordero Díaz.

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderado judicial, el Departamento de Antioquia-Fondo de Vivienda, promovió demanda ejecutiva en ejercicio de la acción real, pretendiendo se librara mandamiento de pago en su favor y en contra del demandado, señor Rafael Antonio Cordero Díaz, por la suma de \$105.340.520 como capital y \$6.652.965, por concepto de intereses de plazo causados y no pagados, más los intereses moratorios, deuda que se encuentra garantizada a través de garantía hipotecaria constituida mediante la Escritura Pública N°1281 del 13 de junio de 2019 de la Notaría Segunda de Bello, respecto del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 001-5204234.

El escrito introductor fue dirigido al juez civil municipal de Medellín, correspondiendo por reparto al Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Medellín, autoridad judicial que mediante auto de 29 de abril de 2022 (Archivo digital 004), decidió rechazar la demanda por falta de competencia, con sustento en lo dispuesto en la regla 7 del artículo 28 del C.G.P., norma según la cual la competencia territorial en el procesos en los que se ejerciten derechos reales, es del juez del lugar donde estén ubicados los bienes y como en este caso el bien gravado con hipoteca está ubicado en el Municipio de Bello, estimó pertinente remitir el expediente a reparto de los juzgados civiles de esa municipalidad.

Efectuada la anterior remisión, la demanda fue repartida al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bello, despacho judicial que también se declaró incompetente para conocer del asunto, proponiendo en consecuencia conflicto negativo de competencia, argumentando que en este caso la competencia es del Juzgado Civil Municipal de Medellín, de forma privativa en atención a la calidad de los sujetos, por así disponerlo la regla 10 del artículo 28 y el artículo 29 del C.G.P. (Archivo digital 005).

Recibido el expediente en el Tribunal, se procede a resolver de plano el conflicto suscitado entre las referidas dependencias judiciales, conforme lo manda el artículo 139 del Código General del Proceso, previas las siguientes.

II. CONSIDERACIONES

1. Corresponde a esta Magistratura, definir el conflicto suscitado entre los Juzgados Diecinueve Civil Municipal de Medellín y el Tercero Civil Municipal de Bello, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 139 del Código General del Proceso, por tratarse esta Corporación del Superior Funcional común a las dos dependencias judiciales aludidas.
2. La necesidad de distribuir la función de administrar justicia entre distintos órganos judiciales determina la formulación de reglas legales, tendientes a satisfacerlas, y es precisamente en este punto en el cual cobra importancia el concepto **competencia**.

La noción de **competencia** viene en este sentido a integrar y concretar el amplio ámbito de atribuciones que es circunstancial a la idea de potestad judicial; ello por cuanto una vez se ha establecido que el conocimiento de determinado tipo de petición corresponde a los órganos judiciales del Estado, la regla de competencia interviene para determinar y asignar de forma específica a cuál de todos los órganos judiciales dispuestos corresponde el conocimiento de la causa. No cabe duda que la competencia guarda íntima relación con la garantía procesal de legalidad del juez y específicamente con el principio de juez natural.

Esta garantía se concreta en el establecimiento de reglas claras que permitan al justiciable conocer el sujeto que habrá de estar encargado de conocer y resolver cada uno de los tópicos materia de decisión; para ello, la competencia se asigna por normas imperativas, **contentivas de reglas de orden público e interés general que sean inmodificables, improrrogables indelegables y susceptibles de sanción ante vulneración mediante la consagración de la nulidad procesal.**

De manera que para asignar la aptitud legal para el conocimiento de un proceso determinado, el legislador acude a los denominados *factores* de competencia, dentro de los cuales se encuentran el **objetivo** que hace referencia a la naturaleza de la controversia, denominado también como competencia por materia; el **subjetivo** de acuerdo a la calidad de las personas que intervienen en la Litis; el **territorial**, en virtud del que se precisa a cuál de los distintos despachos judiciales de igual categoría existentes en el territorio nacional, corresponde atender el ruego de tutela jurisdiccional; y el **funcional** que atiende a las funciones asignadas a cada Juez de la República.

3. En el asunto *sub examine* está claro que lo pretendido es promover una acción ejecutiva para hacer efectiva la garantía real constituida por el demandado en favor de la demandante que en este caso se trata del Departamento de Antioquia, el cual es una entidad territorial, y para esta clase de causas en las que uno de los sujetos es entidad de derecho público es determinante en materia de competencia territorial el foro o fuero personal, conforme lo disponen expresamente la regla 10 del artículo 28 y el artículo 29

del Código General del Proceso, norma ésta última que refiere a que en estos casos **prevalece** la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.

Es cierto, como lo indicó la Juez a la que inicialmente le fue repartido el asunto, lo que indica la regla 7 del artículo 28 del C.G.P. cuando se trata del ejercicio de derechos reales, por lo que podría pensarse si se tienen en cuenta solamente las reglas 7 y 10 de la referida norma, que se presenta concurrencia en relación con los fueros del criterio territorial de competencia, empero la solución en el *sub lite* viene dada del contenido del artículo 29 al indicar que prevalece la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.

Sobre tal asunto, se ha pronunciado en forma reciente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en Auto AC1590 de 2022, proferido al dirimir un conflicto de competencia, como sigue:

(...)

4. No obstante lo anterior, el numeral 10° dispone que en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad... Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas».

Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de carácter privativo, el canon 29 del CGP dispone que «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes... Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor» (Resaltado por la Corte).

Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad pública, la competencia privativa será el del domicilio de ésta, como regla de principio.

Esto en estrecha concordancia con lo decantado por la Sala, a través del precedente (AC140-2020), que guarda simetría con el sub examine, habida cuenta que el artículo 29 del Código General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia «en consideración a la calidad de las partes» prima.

Sobre el particular resáltese que el factor subjetivo se establece a partir de «la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarquía superior cuando se trata de entidades públicas:

nación, departamentos, municipios, intendencias y comisarias» 3, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia «exclusiva» que consulta a determinados funcionarios judiciales y «excluyente» frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la «prorrogabilidad»; II) cualificación del sujeto procesal que interviene en la relación jurídico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la República en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6°, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado.

Ahora, es claro en el *sub lite* que la parte demandante es el Departamento de Antioquia, haciéndose necesario para aplicar el parámetro de competencia de forma exclusiva, tener certeza sobre su condición, determinando si en efecto se trata de una entidad territorial, para lo cual basta con remitirse al artículo 286 de la Carta Política sin afán de auscultar en la normativa de inferior jerarquía que lo desarrolla, para concluir que los departamentos son entidades territoriales.

Puestas así las cosas, aplicando las anteriores premisas al caso concreto y entendido como está que el Departamento de Antioquia es una entidad territorial, la competencia para conocer de la presente demanda se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Medellín, entonces será el Juez Diecinueve Civil Municipal de Medellín quien debe asumir el conocimiento del presente asunto.

III. CONCLUSIÓN

Viene de lo dicho que tal y como está redactado el libelo genitor, la autoridad judicial competente para conocer de la demanda que encabeza estas diligencias, es el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Medellín, agencia judicial a la que se ordenará remitirlas.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,**

II. RESUELVE

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado, **DECLARANDO** que el competente para conocer del proceso referido en la motivación, es el **JUZGADO DIECINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**, al cual se ordena remitir las presentes diligencias, una vez adquiera firmeza este auto.

SEGUNDO. COMUNICAR la decisión adoptada al **JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE BELLO**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dcce901413483455ea9be7593f07abaccc6b13849cabfcae559550345ab9c45**

Documento generado en 19/12/2022 02:29:06 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>